

Suplemento mensual. Número 172. Agosto de 2011

Foto: Verena Glass

• La hidroeléctrica de Belo Monte en Brasil: La Amazonía en riesgo de caos

• El oprobioso Arco Sur de Marcelo Ebrard

• "Cinco años atrás no habia movimiento indígena en Perú, ahora somos actores": Miguel Palacín

• Evo Morales: "Quieran o no habrá carretera"

Oro de pobres

A MÁS DE DOS DÉCADAS de la antidemocrática incorporación de México al neoliberalismo descarnado, como uno de sus laboratorios neocoloniales más "avanzados" en el hemisferio americano, el panorama no podría ser más desolador e indignante. El "libre" comercio con Estados Unidos y Canadá, yugo fundamental de nuestra economía (hay otros: la corrupción gubernamental, el narcotráfico, la desigualdad sostenida), cumple con creces su proyecto de destruirnos como Nación soberana y amenaza con borrar todo lo regional en beneficio de las grandes empresas trasnacionales, que para nosotros son desnacionales. Con más del 10 por ciento de la población obligada a la migración ilegal y la semiesclavitud en el vecino país del norte, y con la mitad de los mexicanos restantes hundidos en la pobreza, el proyecto político y económico de la ultraderecha triunfante nos está destruyendo y no se vislumbran alternativas coherentes y viables, como no sean las luchas focales y aisladas, por lo general en territorios indígenas. En tanto, los sindicatos tradicionales son la encarnación misma de la derrota (electricistas, mineros), cuando no de la descomposición (petroleros duchampistas, maestros gordillanos).

El oro es la metáfora cruel de nuestro presente. La vinculación barroca entre el áureo metal y el excremento proporciona una clave de nuestra condición vergonzosa. El capitalismo entra en recesión mientras el oro sube hasta las nubes, y hoy se ofrece a las mineras nuestro subsuelo para que sus señorías saqueen lo que quieran sin consideración alguna por los mexicanos. El oro siempre está ensangrentado, y el calderonato alcanza pavorosos récords en materia de sangre que no despeinan a los inversionistas de la extracción, los emaciadores de la tierra cultivable, los envenenadores de nuestros ríos, ni los banqueros yanquis y gachupines. Eso sí, el gobierno federal gasta carretadas nada transparentes de dólares en recomprar el metálico recurso que tan bien supo malbaratar a sus amos con servil obediencia, y en un arrebato anal lo entierra en las bóvedas del Banco de México y uno que otro innombrable bolsillo particular.

Para garantizar el proceso, este gobierno desató una guerra sin pies ni cabeza, suficiente para doblegar las voluntades de resistencia en buena parte del país, incluyendo aquellas arrogantes urbes de "progreso sostenido" como Monterrey. Con el norte y buena parte del occidente convertidos en campo de batalla donde la violencia es unilateral entre pandillas criminales y tropas o policías degradadas que se supone están enfrentándose, la percepción neta es que coinciden en desproteger y aniquilar a la gente. ¿Qué tan distintos son los fuegos mortíferos de nuestro oro en Chihuahua (primer productor del mencionado recurso) y los diamantes ensangrentados de Sierra Leona? A lo mejor la tragedia juarense no es mera casualidad.

El extractivismo desbocado no sólo infectó a escala suicida a países con gobiernos entreguistas como el nuestro, Colombia, Honduras y Chile. También aqueja a los presuntos Estados "progresistas" del sur, no importa cuán lindas credenciales de vocación popular nos quieran presumir. Y la epidemia no se limita a los metales y el petróleo. También los ríos, las semillas naturales, los territorios más o menos conservados.

La coartada del progreso se cae en pedazos. En México vivimos un festín de pillos al que los partidos políticos son invitados de honor (aunque poquito) y los monopolios de nuestros magnates Forbes se ahítan con las sobras que dejan los capitalistas extranjeros. Saqueo, despojo, gestión corrupta e irresponsable en todos los niveles de "gobierno" son el signo de los tiempos.

De abajo, y sólo de ahí brotan hoy las únicas reacciones vitales. De los pueblos mayas, andinos y amazónicos. De los mapuche y los ngobe. De las organizaciones populares aún a salvo de la complicidad con los vendepatrias y los represores. O sea, de allí donde lo pequeño todavía es hermoso.



Éste es un poema de indios

Anita Enddrezze

Un reportero dijo
que mi último libro no tenía
un poema de indios.

Que *sólo* tenía poemas de amor y pérdida,
de la vida, meditaciones sobre el espíritu
y la materia. Ya sabes,

esas cosas de las que se supone
que los indios no piensan.
Él dijo

que yo no sonaba india
al teléfono.
¿Cómo suena una india?

En maya, la fruta es "el ojo del árbol",
una puerta es la "boca" de la casa,
los pulgares son las madres

de las manos. Hubo un tiempo
en que se hablaban 2000 lenguas diferentes.
Los aztecas se llamaban a sí mismos: gente

que se explica
y habla con claridad. Nosotros
somos todavía esa gente.

Puede que hablemos inglés o castellano,
o hupa, navajo, apache, yaqui,
cree, arapaho, hidatsa, dakota,

francés, salish, miwok, modoc,
inuit, nootka, náhuatl, pomo,
chumashan o mohawk.

Las lenguas antiguas usaban metáforas:
se invocaba a un pez pequeño y resbaladizo
en el canto por un buen parto.

Las palabras creaban la experiencia.
Como este poema. Como las hebras de colores
que los incas trenzaban para contar historias.

Un profesor de la secundaria Lewis and Clark
me dijo que yo no me veía india.
¿Cómo se ven los indios?

Rechonchos, dijo, pequeños y feos.
El chofer de la grúa se negó
a llevarme a mí, a mi hijo de tres años,

y a mi abuela de ochenta,
al taller cuando se estropeó mi coche.
Los indios huelen, dijo.

Le rogué
hasta que gruñó bueno,
y nos brincamos a la grúa.

Me senté quietecita, avergonzada
de estar quietecita
cuando quería incrustar

las madres de mis manos
en sus ojos, y maldecirle
con gusanos en 2000 lenguas diferentes.

Soy bajita y a veces rechoncha.
Me puedo poner realmente fea. Uso mis palabras
como flechas. Soy un pequeño pez resbaladizo

que pare poemas.
Éste es un poema de indios
que no es sobre indios,

al final. Trata sobre
otra cosa.
Ya lo adivinarás.

Anita Endrezze, poeta yaqui por línea paterna, y madre esloveno-alemana, nació en California en 1952. También narradora oral, artista y maestra, ha publicado los libros *Throwing Fire at the Sun, Water at the Moon*, *The Humming of Stars and Bees and Waves* y *At the Helm of Twilight*. (Traducción del inglés: María Rivasés Moñux).

La Jornada
Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa.
Arte y Diseño: Francisco García Noriega

Ojarasca en La Jornada
Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez Redacción: Marcela Salas Cassani *Caligrafía:* Carolina de la Peña *Diseño y formación:* Jorge Navas C.
Retoque fotográfico: Alejandro Pavón Hernández
Asesoría técnica: Francisco del Toro

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, CP. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca,* siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados.
Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV. Av. Cuitláhuac 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

De Topilejo a Chalco

El oprobioso Arco Sur de Marcelo Ebrard

Marcela Salas Cassani


Foto: Verena Glass

SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA. La inminente construcción de la carretera Arco Sur que correrá de Topilejo a Chalco, reavivó la lucha de los pueblos nahuas de Milpa Alta, quienes se oponen a un proyecto que destruirá sus tierras de cultivo, partirá en dos un pueblo y exterminará las zonas boscosas del área, afectando la captación de bióxido de carbono, la liberación de oxígeno, la filtración hídrica para la recarga de mantos acuíferos y pondrá en peligro la supervivencia de especies únicas en el mundo como el conejo teporingo.

La obra está a cargo de la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), e incluye la construcción de un tramo carretero que unirá el estado de Morelos con el de Puebla. Se pretende construir sobre tierras comunales y áreas naturales protegidas de tres delegaciones del Distrito Federal (Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta) y, de acuerdo con informes de Banobras, tendrá un costo de 25 mil millones de pesos que serán aportados por la iniciativa privada.

Los representantes de los pueblos nahuas de Milpa Alta se organizaron en un frente común contra el multimillonario proyecto que, aseguran, "no nos traerá ningún beneficio". Esto ocurrió luego de que el representante general de bienes comunales y pueblos anexos, Julián Flores Aguilar, recibiera un anuncio donde la Coordinación de Proyectos y Supervisión de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lo instaba a "permitir el paso a los terrenos de su propiedad o jurisdicción para realizar trabajos de campo que incluyen la construcción de mojoneras de concreto y excavación de pozos a cielo abierto para estudios geotécnicos", con el fin de llevar a cabo un "proyecto ejecutivo de terracerías, drenaje menor, señalamiento y pavimento de 32 kilómetros en el tramo de la autopista México-Cuernavaca-entronque Tenango".

"Nosotros somos campesinos y sembramos, entre otras cosas, maíz, frijol, calabaza y el 80 por ciento del nopal que se produce en México; si nos quitan la tierra, se va a acabar nuestra fuente de ingresos, así como los empleos que generamos al contratar a jornaleros que vienen de diferentes estados de la república", dijeron a *Ojarasca* habitantes de Villa Milpa Alta.

La exterminación del ecosistema boscoso amenazaría la subsistencia de la biodiversidad regional, pues pone en peligro de extinción a especies como el conejo teporingo o zacatuche, animal endémico con una reducida área de distribución, así como al venado de cola blanca, coyotes y una gran variedad de víboras y aves.

Una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas de Milpa Alta es la tala de los bosques que se encuentran en el tramo donde se tiene proyectado construir la carretera. Los comuneros advierten que esos árboles son los pulmones de la ciudad de México y si son exterminados la captación de bióxido de carbono y la producción de oxígeno se verá irremediablemente afectada.

En la zona boscosa de San Salvador Cuauhtenco y San Pablo Oztotepec, por ejemplo, han iniciado ya las labores de tala. "Hay aserraderos de donde se sacan diariamente 20 o 30 camiones de madera con permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)", denuncian representantes de los pueblos nahuas de esta región. "Ellos dicen que cuidan el bosque, pero la realidad es que lo ven como un negocio, para ellos representa dinero; en cambio, para nosotros los bosques representan el agua, la tierra, la vida misma".

Junto con la tala de árboles, disminuiría la captación de aguas de lluvia y su filtración hacia los mantos acuíferos que, advierten comuneros nahuas, "no sólo abastecen de agua a los pueblos de Milpa Alta, sino a gran parte de los habitantes de la cuenca del Distrito Federal".

La reciente apertura de brechas en las áreas boscosas protegidas "fomenta el turismo indiscriminado y propicia que se dejen residuos como aluminio, plástico y vidrio, lo que a la larga provoca incendios", explican los comuneros, quienes aseguraron que para evitar la devastación del bosque han cerrado las brechas con sus propios medios, "no tenemos recursos económicos ni apoyo del gobierno, pero tampoco lo queremos porque eso comprometería nuestra autonomía".

Las obras del proyecto Arco Sur partirán en dos el territorio de Milpa Alta lo cual, además de los daños que un proyecto de esta magnitud implica para la biodiversidad de la zona, afectará las tradiciones de los pueblos nahuas, pues limitará el paso hacia los bosques "donde año con año se acostumbra ir a recolectar hongos para la alimentación, recoger la leña muerta para utilizarla en las fiestas religiosas, y realizar las jornadas periódicas de saneamiento que previenen los incendios y fortalecen el sentido de comunidad de los pueblos indígenas de Milpa Alta".

Algunos grupos del PRD, PAN y PRI han declarado que "no admitirán el paso de la carretera", pero los comuneros aseguran que no permitirán la politización del problema pues "nosotros estamos aparte, no nos involucraremos con ningún color, aquí no existe ningún partido político, aquí sólo existe nuestra autonomía".

Luego de que la SCT envió un oficio confirmando la realización de la obra, los pueblos nahuas anuncian que "su lucha contra el mal gobierno apenas comienza, pues no piensan consentir que en su territorio se lleve a cabo un proyecto que implica descapitalizar el campo y que provocará la expulsión de la población rural a zonas urbanas y a Estados Unidos".

"Sabemos que el bosque y todo lo que en él habita no puede defenderse, pero para eso estamos nosotros", aseguraron campesinos nahuas, "y por eso, vamos a luchar por nuestro territorio como se pueda. Sabemos que la Constitución nos ampara, actuamos conforme a derecho. Nosotros somos los dueños de la tierra comunal, y somos quienes tenemos derecho a su disfrute".

Los comuneros han emprendido ya acciones para informar a la población de lo que está por suceder y las afectaciones que la construcción de la carretera provocaría. Con sus propios recursos, han colocado lonas en la autopista y han repartido folletos entre los habitantes de los 12 pueblos de Milpa Alta. "Nunca nos consultaron; por eso nos unimos, por eso nos organizamos".

"A nosotros, los campesinos, lo que nos interesa es preservar el bosque. No queremos dinero, sino que se respeten las áreas verdes, la biodiversidad, el agua y nuestras tradiciones. Los bosques son un legado cultural y ancestral para nuestros niños, y no están en venta", finalizaron los comuneros de Milpa Alta.

La hidroeléctrica de Belo Monte

La Amazonía en riesgo de caos

Joana Moncau y Spensy Pimentel*

Sao Paulo, Brasil. Empezó la cuenta regresiva en Altamira (Pará), donde el gobierno brasileño pretende construir la hidroeléctrica de Belo Monte. El proyecto costará una fortuna, de las arcas públicas, unos 19 mil millones de dólares, además de traer una serie de perjuicios incalculables a uno de los principales ríos de la Amazonía brasileña, el Xingu, uno de los mayores símbolos de la diversidad biológica y social en la región, en virtud de los numerosos pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales que habitan sus orillas.

El pasado primero de junio, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) concedió la licencia de instalación a Belo Monte, el último trámite que le faltaba a la empresa. Para la prensa, el gobierno brasileño está fijando un conjunto de 23 condicionantes ambientales cuyo cumplimiento sería fiscalizado. Pero hasta los mismos órganos del Estado brasileño, como el Ministerio Público Federal (MPF), cuestionan duramente la capacidad de aplicación de esas medidas. Por ejemplo, la licencia previa otorgada en el 2010 ya contemplaba 40 condicionantes ambientales, 26 relacionadas con los pueblos indígenas. La atención de al menos 60 por ciento de ellas está atrasada, según denuncian el propio MPF, y las organizaciones indígenas, los movimientos sociales y las ONG que actúan en la región.

Mientras la medicina viene a caballo, los problemas llegan en camión, avión y barco. Dos meses después de que el Ibama diera luz verde al proyecto, los impactos de la instalación de la obra ya comienzan a sentirse en la población local. No pasaron 20 días de que se concedió la licencia cuando iniciaron las obras para recibir a los millares de trabajadores que levantarán la planta. Poco después, ya desembarcaban máquinas en el Caís de Vitória do Xingu, a 50 kilómetros de Altamira.

El consorcio de empresas responsable de la construcción, la Norte Energía, supone la migración de cerca de 100 mil personas a Altamira, lo que duplicará la población de la ciudad, que actualmente es de menos de 100 mil habitantes. Considerando que el cálculo es que en el periodo pico de la obra, el año 2013, se emplearán hasta 19 mil personas, se puede hablar de un promedio de por el menos 80 mil trabajadores sin destino cierto.

Los impactos de esa alta migración ya comienzan a sentirse en la población local, principalmente presiones por la vivienda. Las rentas se disparan y hay comunidades pobres que comienzan a ser desplazadas de barrios pobres de la ciudad, conocidos como "baixões", que deberán ser sumergidos con la construcción de la presa. De las cerca de 6 mil 500 familias de esos barrios que pueden desaparecer bajo el agua, cerca de mil 200 que serán expulsadas ya buscan ocupar terrenos en la ciudad. El pasado 3 de agosto, los movimientos sociales de Altamira realizaron una protesta con cerca de mil personas que denunciaron esos y otros impactos de la obra, durante el lanzamiento de la Operación Ciudadana Xingu (serie de servicios del gobierno federal que busca minimizar los impactos sociales de la obra).

Entre las 16 condicionantes ambientales de la licencia previa, aún no cumplidas, están varias medidas relacionadas con la calidad del agua, la educación, la salud y el saneamiento que podrían minimizar los efectos de la migración en masa. Según la relatoría enviada por el Consorcio Norte Energía al MPF, de las 69 obras enlistadas, apenas dos están concluidas y 16 se iniciaron el pasado mayo. La obra de saneamiento, por ejemplo, prevista para concluirse en el 2014, ya es esencial ahora, pues los migrantes están llegando. Actualmente, 70 por ciento de las casas de la ciudad no tienen acceso a servicios de saneamiento. En cuanto a las condicionantes indígenas, apenas dos fueron cumplidas de manera integral.

Argumentos en contra la obra sobran. El día que fue concedida la licencia, el Panel de Especialistas para el Análisis Crítico de Belo Monte —grupo de científicos organizado para hacer un análisis crítico y autónomo del proyecto— envió una carta a la presidenta Dilma Rousseff, firmada por 300 científicos de las principales universidades brasileñas, en la que piden la suspensión inmediata de la licencia concedida por el Ibama para la construcción de la planta, y califican la concesión como "un acto de imprudencia". El Ministerio Público Federal ya sometió a juicio 11 acciones por problemas en el otorgamiento de la licencia de Belo Monte, exigiendo la suspensión de las autorizaciones para la obra. La última de ellas cuestiona la licencia sin exigir las acciones previas, alegando que hay "riesgo de caos social".

El pasado 20 de julio, líderes indígenas arara y juruna enviaron una carta al relator especial de la ONU, James Anaya, para pedir su apoyo e intervención en la lucha contra Belo Monte. Estos pueblos residen en la región de Volta Grande do Xingu, la cual, después de concretarse la obra de la planta, quedará seca en gran parte, en un trecho que alcanza 100 kilómetros, afectando las tierras indígenas Paquiçamba y Arara da Volta Grande.

Los representantes indígenas denuncian la falta de voluntad del gobierno brasileño de respetar las medidas cautelares solicitadas en abril de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las comunidades reclaman que no hubo un proceso de consulta libre, previo e informado, antes de ser autorizada una obra que los afectará. "Además de que no nos consultaron anteriormente, el Estado no está haciendo absolutamente nada para cambiar este cuadro", lamentan.

Belo Monte es la nueva versión de un proyecto lanzado por la dictadura militar brasileña en los años setenta: el Complejo de Kararaô, que suponía la construcción de hasta seis presas en el Xingu. El proyecto, archivado después de una intensa movilización indígena y contundentes cuestionamientos sobre sus impactos socioambientales, fue recuperado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en un periodo en que se retomaron las inversiones en infraestructura por cuenta del crecimiento económico.

Lula retomó el proyecto dispuesto a concretarlo de cualquier modo, incluso con el 80 por ciento de financiamiento público, por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El proyecto prevé la construcción de una planta de 11 mil MW, que sería la tercera más grande del mundo, y la segunda mayor hidroeléctrica del país en capacidad instalada. Sin embargo, las grandes variaciones del río, entre seco y lleno, harán que, en promedio, sólo produzca 4 mil 500 MW (en los periodos de seca, apenas mil 800). El bajo aprovechamiento, sumado al historial del proyecto, que suponía la construcción de más de una presa en el río, hace con que los opositores sospechen que más obras pueden venir en el futuro.

La prisa del gobierno y del consorcio Norte Energía para concretar Belo Monte contrasta con la incertidumbre sobre la eficacia económica y técnica de la obra. "Hasta ahora no se sabe de cierto cuánto va costar. Ninguna empresa quiere asumir la obra. Para que esa planta tenga un mínimo de producción será necesario abrir un canal en la región más grande que el de Panamá. No se sabe qué sucederá con los indios y ribereños", opina el periodista Washington Novaes, uno de los más destacados analistas brasileños sobre la temática ambiental. "Hay varios estudios que dicen que no hay necesidad de ampliar la oferta de energía, y en cambio hay que conservar y economizar."

"A quién le va servir la energía producida?" cuestiona Novaes. "Los países del primer mundo no quieren producir aluminio y le dan la tarea a países como Brasil, porque el costo ambiental es alto. Belo Monte no debería de haberse pensado siquiera".

Megaron, importante líder de los kayapó, uno de los pueblos indígenas más activos en la lucha contra la planta, mantiene la esperanza de frenar el proyecto: "El gobierno quiere construir Belo Monte de cualquier modo. No sé qué va a hacer mi pueblo, qué van a hacer los guerreros. Ellos se van a organizar, se van juntar con otras personas que utilizan el Xingu para sobrevivir y van a frenar esa construcción. Será una respuesta ante el gobierno de Dilma, que no conversa con los indios, con los ribereños, con los pescadores, no quiere respetar a los que luchan y viven para que sobreviva el Xingu".

*** con la colaboración de Bianca Pyl**



"La presa es la destrucción de nuestro pueblo"

Todo en la vida está interconectado

Nosotros, el pueblo indígena de Xingu, no queremos la presa Belo Monte. Nosotros, pueblo de Xingu, luchamos por nuestro pueblo, nuestra tierra, y también por el futuro del planeta. Siendo presidente, Lula dijo que estaba preocupado por los indios, que estaba preocupado por el Amazonas, pero que no quería que las ONG internacionales se opusieran a la presa.

No somos ONG internacionales. Nosotros, los 62 líderes indígenas de las aldeas de Bacajâ, Mrotidjam, Kararaô, Terra-Wanga, Boa Vista kilómetro 17, Tukamâ, Kapoto, Moikarako, Aykre, Kiketrum, Potikro, Tukai, Mentutire, Omekrankum y Pokaimone Cakamkubem, ya hemos sido objeto de muchas invasiones y enfrentado muchos peligros.

Cuando los portugueses llegaron a Brasil, nosotros los indios ya estábamos aquí y muchos murieron, muchos han perdido sus vastos territorios, la mayor parte de sus derechos, muchos han perdido parte de su cultura y otros han desaparecido completamente.

El bosque es nuestra tienda, el río nuestro mercado. No queremos que los ríos de Xingu sean invadidos, que nuestros pueblos y nuestros hijos, que serán criados de acuerdo con nuestras costumbres, estén en peligro. No queremos la represa hidroeléctrica de Belo Monte porque sabemos que solamente traerá destrucción. No pensamos sólo a nivel local, sino en todas las consecuencias destructivas de la presa: que atraerá más negocios, más explotaciones, promoverá la invasión de nuestras tierras, traerá conflictos e incluso la construcción de nuevas presas. Si el hombre blanco continúa así, todo será destruido muy rápidamente. Nos preguntamos: ¿Qué más quiere el gobierno? ¿De qué sirve tanta energía después de tanta destrucción?

Ya hemos organizado numerosas reuniones y hemos participado en grandes encuentros para oponernos al gran complejo de Belo Monte, como lo hicimos en 1989 y 2008 en Altamira, y en 2009 en el pueblo de Piaraçu donde muchos de nuestros líderes estaban presentes.

Hablamos personalmente con el presidente Lula para convencerlo de que no queremos de la presa y nos prometió que no se nos impondría. También hablamos personalmente con Eletronorte y Eletrobras, con la FUNAI y el IBAMA. Ya hemos advertido al gobierno que si el proyecto de presa se lleva a cabo, se declarará la guerra y él tendrá la responsabilidad. El gobierno no ha entendido nuestro mensaje y, de nuevo se ha burlado de los pueblos indígenas, asegurándoles que construiría la represa a toda costa. Cuando el presidente Lula dijo esto, demostró que él no le hizo caso a la voz de los pueblos indígenas y que no reconoce nuestros derechos. Su falta de respeto lo llevó a planear la licitación de Belo Monte durante la Semana de los Pueblos Indígenas.

Debido a esto, nosotros, los indios de la región de Xingu, hemos invitado al cineasta James Cameron y su equipo, a los representantes del Movimiento Xingu para Sempre, el movimiento de mujeres, ISA, Amazon Watch, CIMI y otros. Queremos que nos ayuden a comunicar nuestro mensaje al mundo y a los propios brasileños que aún no saben lo que está sucediendo en el Xingu. Los invitamos porque sabemos que hay muchas personas en Brasil y en otros lugares que quieren ayudarnos a proteger nuestros derechos y territorios. Estos son los bienvenidos entre nosotros.

Luchamos por nuestro pueblo, nuestras tierras, nuestros bosques, nuestros ríos para nuestros hijos y la gloria de nuestros antepasados. También estamos luchando por el futuro del mundo porque sabemos que estos bosques son tan beneficiosos para los pueblos indígenas como para la sociedad brasileña y el mundo. También sabemos que sin estos bosques, muchas personas sufrirán mucho más que con toda la destrucción que ocurrió en el pasado. Todo en la vida está interconectado, como la sangre que une a las familias. El mundo debe saber lo que está sucediendo aquí, debe darse cuenta que la destrucción de los bosques e indígenas significa su propia destrucción. Por estas razones no queremos Belo Monte. La presa significa la destrucción de nuestro pueblo.

Estamos decididos, somos fuertes, estamos dispuestos a luchar y recordamos las palabras de una carta que un indio de Norteamérica envió una vez a la presidencia de Estados Unidos: "Sólo cuando el hombre blanco haya destruido todo el bosque, que haya matado los peces y los animales y que todos los ríos se hayan secado, se dará cuenta de que nadie puede comer dinero".

Jefe Raoni







El Jefe Raoni



Megaron, líder kayapó

Fotos: Verena Glass

Centroamérica

En un morir de ríos

Mueren los ríos de Mesoamérica, ha dicho Eliseo Vargas, líder del pueblo naso, sobre la muerte del río Changuinola en Panamá, tras el descenso del 60 por ciento de su caudal, como consecuencia del cierre de compuertas de la represa Chan 75, una señal de la muerte que espera a los ríos más caudalosos del istmo centroamericano.

A pesar de la existencia de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio del 2009, la empresa estadounidense AES continuó con la construcción de la cortina y los desalojos del pueblo ngöbes, sin tener en consideración la muerte del río Changuinola y los más de cinco mil indígenas afectados.

Desafortunadamente, parece ser que el mismo destino de los ngöbes será el del pueblo tawahka, que nunca fue consultado sobre la construcción de las represas en el río Patuca, en Honduras, y en un futuro cercano se encontrará aislado, ante la pérdida de caudal que sufrirá el río, con la construcción de una cortina en Piedras Amarillas, en Olancho, la cual se inició el pasado 16 de mayo.

El Patuca en los últimos años ha sufrido de una enorme deforestación, especialmente en sus cabeceras, con un impresionante declive del caudal, que prácticamente lo hace innavegable en algunos recodos. Al mismo tiempo, los humedales costeros se verán afectados por un proceso de salinización, que tendrá severas consecuencias para la cadena de lagunas y esteros de la Moskitia.

El auge de la construcción de represas hidroeléctricas en Centroamérica es parte del Plan Puebla Panamá —rebautizado Proyecto Mesoamericano— y relanzado en el Encuentro Ministerial sobre Energía y Clima, efectuado en Washington en abril de 2010, reunión donde se planteó la nueva matriz de producción energética para el continente.

Con el pretexto de frenar el cambio climático, se ha dado prioridad a supuestas formas de producción de "energía limpia", para frenar el abuso de los combustibles fósiles. Sin embargo, las represas hidroeléctricas son parte de las falsas soluciones al cambio climático que vienen planteando tanto organismos financieros internacionales como los gobiernos de países industrializados.



El río Xingu, en Brasil — Foto: Renata S. Pinheiro

En el caso de la represa que ya se comenzó a construir en Piedras Amarillas, conocida como Patuca III, es la compañía china Sinihydro la encargada de realizar la obra de infraestructura, siendo está la misma empresa que construyó la megarepresa de las Tres Gargantas en China.

Que el gobierno chino reconozca los enormes problemas de contaminación y las fallas geológicas existentes, incluyendo un 1.4 millones de desplazados que no han sido reubicados, como consecuencias de la hidroeléctrica de las Tres Gargantas, denota la irresponsabilidad de Sinohydro y los múltiples problemas que acechan al pueblo tawahka y otros pueblos que habitan la Moskitia hondureña.

La posterior construcción de las hidroeléctricas Patuca I y Patuca II, conllevará a sumergir enormes extensiones de bosque tropical que paulatinamente serán fuente de emisiones de gas metano, 20 veces más contaminantes que el dióxido de carbono. La nueva matriz energética promovida por el gobierno de Obama y Clinton promueve las falsas soluciones al cambio climático, sin que realmente se tomen las previsiones necesarias para frenar el despilfarro energético o se promuevan otras formas de aprovechamiento hidroenergético que salvaguarden los ríos.

La reprochable posición asumida por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en relación a la construcción de una presa en el río Xingu, Brasil, señala la visión obsoleta de muchos de los políticos latinoamericanos que, enfrascados en un concepto obsoleto de desarrollo, persisten en la destrucción de los ríos como una opción para evitar el uso de combustibles fósiles y hacer frente al cambio climático, el mayor reto que confronta actualmente la humanidad.

Desde los tawahkas, pasando por los ngöbes, naso, terraba, ixiles, chortis, los pueblos indígenas de Mesoamérica sufren de una ofensiva de parte de los Estados-nación que deniegan el derecho a la consulta y de paso irrespetan las medidas cautelares emitidas por el sistema interamericano de justicia

.

Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh)

Los ikoo´ts contra los molinos de viento

La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio, reactivó su lucha por la cancelación del megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec debido a que, explican en un reciente pronunciamiento, este proyecto sólo llevará despojo, división y desplazamiento silencioso del territorio, "para hacer negocios sucios con lo que llaman energía verde y limpia".

Reunidas en la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, comunidades, autoridades civiles y agrarias, organizaciones civiles y colectivos independientes de esta comunidad y de Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo, San Mateo del Mar, La Ventosa y La Venta, acordaron organizarse y resistir pues, concluyeron, "no necesitamos que el gobierno y las empresas multinacionales vengan a imponernos su forma y su visión del mundo".

El megaoproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec, explicaron en la asamblea, es "impulsado y desarrollado por los gobiernos, el Banco Mundial, el FMI y por empresas como Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, Eoliatec, Femsa-Macquaire, entre otras. Tal proyecto "está dividiendo a nuestros pueblos, amenazando nuestra vida y despojándonos de nuestras tierras y nuestro territorio".

Los pueblos del Istmo exigen la cancelación del proyecto, la cancelación inmediata de las averiguaciones previas por despojo (iniciadas por las empresas españolas contra los legítimos dueños de las tierras de Unión Hidalgo) y del resto de las averiguaciones previas, de las órdenes de aprehensión y las causas penales contra quienes defienden el territorio. Exigen ponerle fin a las altas tarifas de la energía eléctrica, que profundiza la precariedad económica de los pueblos istmeños y la no instalación de los medidores digitales, considerados un mecanismo de privatización de la energía eléctrica en nuestro país.

Las comunidades demandan también la anulación del contrato de usufructo que realizó la empresa Preneal con el comisariado de bienes comunales de San Dionisio del Mar, que proyecta ocupar el territorio de esta comunidad habitado por el pueblo ikoo´ts.

Ojarasca

Bolivia

Evo Morales a indígenas de Beni:
"Quieran o no habrá carretera"

Rosa Rojas

La Paz, Bolivia. Tres frases del presidente boliviano Evo Morales marcan la posición de su gobierno frente a los pueblos indígenas del oriente de su país, a despecho de su discurso de defensa de los derechos de los pueblos originarios, de la Pachamama (Madre Tierra) y de la equidad de género:

"Quieran o no quieran vamos a construir el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que unirá los departamentos del Beni y Cochabamba", les dijo el mandatario el pasado 29 de junio a los chimanes, mojeños y yuracaré que se oponen a que una carretera parta en dos su Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) e "instruyó" a los jóvenes cocaleros del Chapare —su base dura— "a conquistar (enamorar) a las compañeras yuracaré trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino". Luego, el 2 de agosto, afirmó que no entiende que algunos dirigentes, con la excusa de defender el ambiente, estén contra el progreso, la integración y el desarrollo del país y se dejen manipular por organizaciones no gubernamentales y políticos de derecha. "Si niegan este proyecto son traidores" acusó.

El TIPNIS es importante para conservar las fuentes de agua, las cuencas hídricas y la diversidad de flora y fauna silvestre. Unas de las más importantes del país se encuentran al noreste del departamento de Cochabamba (provincia Chapare) y al sur del Beni (provincia Moxos). Según la Fundación Natura, 3 mil 400 especies de flora y fauna se verán en peligro y más de medio millón de árboles serán talados por la construcción de la citada carretera.



Foto: Verena Glass

La gran Marcha de 1990, por tierra, territorio y dignidad, protagonizada por representantes indígenas de las tierras bajas de 34 pueblos, aglutinados en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), conquistó ese año el reconocimiento del TIPNIS mediante decreto supremo, que reconocía asentamientos de colonos, y dispuso la demarcación de una línea roja para evitar nuevas invasiones en el área. Morales, como dirigente de los cocaleros, negoció con el ahora opositor dirigente indígena Marcial Fabricano dicha línea roja.

En febrero de 2009, Evo Morales entregó a los indígenas el título ejecutorial colectivo del TIPNIS por un millón 91 mil 656 hectáreas, beneficiando a unas mil quinientas familias, más de siete mil habitantes mojeños, yuracaré y chimanes.

Según un reporte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), entre las mayores amenazas a la biodiversidad y al manejo del TIPNIS está el creciente ingreso de colonizadores a dicha área, y los cultivos de coca junto con las actividades ilícitas del narcotráfico son una grave amenaza. Se ha hecho prospección petrolera, hay extracción ilegal de madera, la administración del parque es muy débil. Existe la propuesta del actual gobierno de construir una carretera que aumentará la depredación del área y otras actividades ilegales. Las comunidades del Conisur no están de acuerdo, según algunos de sus dirigentes.*

Frente a esta problemática y a la dura posición de Morales Ayma, (que se ha tratado de matizar convocando para el 9 de agosto a un diálogo con los indígenas del TIPNIS, aunque no a su organización matriz, la CIDOB, según declaró a los medios el diputado indígena por el oficialista Movimiento al Socialismo, MAS, Pedro Nuni), dicha organización convocó una marcha de protesta que partirá el 15 de agosto desde la capital del departamento del Beni, Trinidad, hasta La Paz.

Los dirigentes de la CIDOB y del TIPNIS anunciaron que no acudirán a dicha reunión y que estarían dispuestos a negociar con el gobierno ya en plena marcha, lo que rechazó el ministro de la presidencia, Carlos Romero, anticipando que "no hay conversación posible que sea objetiva y razonable en una marcha".

Ya previamente Morales había tenido roces con la CIDOB, pero también con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo (Conamaq), que representa a aymaras altiplánicos, a propósito de proyectos mineros, petroleros y carreteros, por la exigencia de que el gobierno aplique el derecho a la consulta previa e informada, a través de sus propias instancias organizativas, y que ésta sea vinculante, para decidir sobre cualquier proyecto que afecte sus tierras y territorios. Nadie se sorprendió entonces de que en el Chapare, ante integrantes de las seis federaciones de productores de hoja de coca, de las que aún es dirigente, Evo reiterara que se va a consultar a los indígenas sobre la carretera en cuestión, "pero quiero que sepan que no tiene [la consulta] carácter vinculante. No porque ellos digan no, no se va a hacer. Las consultas están constitucionalizadas pero no tienen carácter de obligatoriedad", por lo que espera inaugurar esa carretera en el 2014.

Según la Agencia Nacional Fides, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que afirma que si el tramo II de la citada carretera cruza el TIPNIS se violarán diversas leyes y convenciones internacionales, propuso desviar el trazo de la carretera aunque sea más costoso construirla.

Su coordinador, Edwin Vargas, denunció que más que la necesidad de integración nacional, en el TIPNIS hay dos áreas de extracción de hidrocarburos, los bloques Chispani y Secur que ya han sido identificados y concesionados, algo que el gobierno no menciona.

Otro tema de fondo es el planteamiento que hacen dos organizaciones aliadas del gobierno boliviano, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB, antes colonizadores) de que los afiliados a la CIDOB son los nuevos latifundistas y que es necesario anular las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

El secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga, declaró a *La Prensa* el 2 de agosto, que hay una "desigualdad criminal en la distribución y tenencia de terrenos. Los indígenas, cada uno, tienen más de 20 mil hectáreas, mientras nosotros apenas contamos con una a cinco hectáreas. Por eso, tarde o temprano, independientemente de que se construya o no la carretera, nos vamos a entrar, sin depredar la naturaleza ni para plantar coca. Traspasaremos el Polígono 7 (territorio en el sur del área donde están asentados legalmente los cocaleros) para tener más tierras porque con las TCO saneadas los indígenas nos quieren asfixiar".

Aliaga, quien califica la posición de la CIDOB como provocadora y "que busca desgastar y mellar la imagen del presidente Evo Morales", criticó las amenazas de marchas y bloqueos y advirtió que si éstas se hacen, se levantarán por la desigualdad de tierras "y nos vamos a medir con ellos, cuando pasen por el Chapare o los Yungas".

*(http://cmsdata.iucn.org/downloads/isiboro_secure_bolivia_icca_database.pdf).



Foto: Verena Glass

"Cinco años atrás no había movimiento indígena en Perú, ahora somos actores": Miguel Palacín

El nuevo presidente peruano, Ollanta Humala, acumula el descontento social, pero no es quien debería estar en ese escenario. Los movimientos indígena, campesino, sindical y ambientalista hemos sido excluidos y derrotados antes de la inscripción de listas. Las reglas están pensadas para eso. Y Ollanta ha girado al centro. Tuvo que decir que va a conservar el modelo económico, que no va a cambiar la Constitución. Pero los movimientos piden que cambie un modelo que persigue y mata dirigentes.

La experiencia de Bolivia nos sirve para no cometer los errores ocurridos. Puede pasar lo que ocurrió en Ecuador con Rafael Correa, que está criminalizando el movimiento indígena. Es mejor mantener una independencia política. Después de la guerra interna atroz entre Sendero Luminoso y el Estado, que nos dejó desarticulados, el movimiento ha logrado entrar en un proceso de crecimiento.

La guerra interna generó una desarticulación enorme. La derecha lo aprovechó. Con la caída de Fujimori, la gente joven logró organizarse. Fue la primera aparición del movimiento social. Ahí se visibilizó el movimiento indígena y campesino. Cinco años atrás aquí no había movimiento indígena, éramos simplemente campesinos y no teníamos un proyecto político. Pero hoy hemos logrado ser parte del movimiento social, ya no somos auditores de ONG, ahora somos actores.

Los sectores sociales tienen fuerza como para condicionar la política del nuevo gobierno. Aunque la tarea es complicada. Algunos sectores sociales, de ciudades costeñas principalmente, hablan de redistribución de riqueza, de derechos humanos. En cambio, los que venimos del Perú real pedimos cambiar el modelo del Estado centralista. Hay que redistribuir los poderes y la riqueza y, sobre todo, consultar para tomar decisiones. Tenemos que ser dueños de nuestros recursos.

El movimiento indígena se hizo visible desde mayo de 2008. Acordamos cerrar los territorios, trabajar con las bases y empezamos a hacer movilizaciones largas de 15 días, un mes. Esos fueron los levantamientos en Canchis, en Pasco, en el norte. El punto álgido del choque con el Estado fue Bagua [levantamiento indígena en 2009 por las leyes que abrían la selva a las multinacionales].

Bagua señaló al mundo que aquí hay vulneración de derechos, que se mata a la gente que protesta, que el Estado resuelve con armas, jueces y fiscales, y no políticamente. El escarmiento salió al revés. Los que llevaron armas, los que fueron a matar, murieron.

La minería está en todos los territorios: en la Costa, los Andes y la Amazonía. Cuando el Estado entrega concesiones no consulta. Y cuando la gente dice "no", el Estado empieza a perseguir, a criminalizar. Los muertos siempre son pobres, son campesinos en resistencia contra la minería.

En 2002 se logró convocar la consulta en Tambogrande, y en 2006 la de Ayabaca y Huancabamba. Después vinieron las de Tacna y Tía María. Todo un proceso de consulta, con mandato de la ONU. El Congreso aprobó la ley de consulta previa, pero el gobierno objetó que en el país rige la Constitución actual y los recursos naturales son patrimonio del Estado.

Pero el Convenio 169 de la OIT, que obliga a la consulta, fue ratificado en 1994, por lo que es ley nacional. El gobierno está obligado a consultar a las comunidades.

Perú es un país muy racista y Lima es el espejo de ese racismo. Si alguien viene hablando quechua es excluido. Si vienes con el sombrero es porque formas parte del folclore, tus propios paisanos te miran así. La educación está hecha para el odio y el olvido. Todas las constituciones políticas se han hecho contra los indios y sin ellos. Cuando vas a la escuela y hablas en quechua te golpean, cuando no pronuncias bien el castellano eres objeto de burla, eso pese a que Lima tiene un 70 por ciento de migrantes y quechua-hablantes. Hay dos Perú: el legal, que es Lima, y el Perú real.

Hay diferencias con la experiencia de Bolivia, donde pareciera que se ha mantenido más la identidad indígena. Hemos vivido procesos distintos desde la Colonia. Aquí fue tan dura la colonización que el que se revelaba pagaba con sangre junto con toda su generación. Cuando se sublevó Tupac Amaru murieron 150 mil personas.

Todos los países están celebrando su bicentenario. En Perú todavía nos faltan 13 años. Fue el último país en lograr la libertad y no la hicieron los peruanos. El general San Martín peleó para que se proclamara la independencia en la plaza de Armas, pero sin indios. Los indios estaban en el cerro San Cristóbal y no se les permitió ingresar. Sólo fue un traspaso de mando de la colonia a los hijos de la colonia. Reconocieron a los indios en 1919 y la lucha siguió hasta los años 60, cuando se hizo la reforma agraria y se les devolvieron las tierras, pero no el territorio. En 1993 Fujimori borró derechos de los pueblos indígenas: que las tierras son inembargables, imprescriptibles e inalienables; ahora se pueden vender e hipotecar. Con la reforma agraria se devolvieron las tierras y se crearon cooperativas. El problema es que estas cooperativas se han privatizado. Y hoy hay cooperativas controladas por bandas armadas. Antes había un límite de 2 mil hectáreas. Ahora se puede llegar a 40 mil. Se está volviendo al latifundio.

La madre del cordero es la Constitución, que da prioridad a la propiedad y la inversión privada. Fujimori sacó además un conjunto de leyes que benefician a la inversión. Es fácil matar a quien protesta y es dueño de la tierra. Ésa es la seguridad jurídica. Hay unos 16 millones de hectáreas concesionadas en la región amazónica, y en la andina más de 24 millones. Todos, territorios indígenas. Y poco a poco va apareciendo el otro imperio, el brasileño, que con sus empresas logra concesiones para enormes hidroeléctricas y vías de integración como el famoso IIRSA. Y todo esto lo están haciendo gobiernos "progresistas" como el de Evo, Chávez o Correa.

El movimiento social no madura porque uno quiera, sino cuando llega el momento. Aquí tenemos dos corrientes: los movimientos sociales de después de los 90 y los de antes. La práctica de las organizaciones de antes es todavía caudillista, arribista. Eso va a desaparecer. El movimiento social es otro. Es el que está en la calle vendiendo sus productos en la mañana y en la tarde sale a luchar. La lucha está en el campo.

Miguel Palacín, uno de los fundadores de la Confederación Nacional de Comuni-dades Afectadas por la Minería (Conaca-mi), hoy coordina la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Entrevista de Emma Gascó y Martín Cúneo, publicada por Opsur, y adaptada por *Ojarasca*.

